

Naciones y votos

Santos Juliá, El País, 17/03/1996

Entre tantos vencedores como han deparado las pasadas elecciones, sólo los nacionalistas sufren una ligera pérdida en términos absolutos y, debido al incremento del censo, un retroceso no despreciable en términos relativos. CiU ha perdido, en números redondos, 25.000 votos, y la infatigable diputada Rahola hablará en nombre de 22.000 catalanes menos, lo que podría aliviar los martirizados oídos de los madrileños si fuera capaz de reducir en la misma medida su caudaloso chorro de voz. Por el lado vasco, el incremento que ha experimentado el PNV no llega a enjugar las pérdidas sufridas por EA y HB, que ceden, entre los dos, unos 40.000 votos. El resultado final es que la suma de todos los nacionalismos vascos no llega ni a la mitad de los votos emitidos en su propia comunidad (se queda en el 47%) y nada menos que el 66% de los votantes de Cataluña da la espalda a los partidos nacionalistas cuando se trata de enviar a sus representantes al Parlamento español.

Se mire por donde se mire, esto es un parón, y hasta un retroceso, en la marcha hacia la construcción de la nación ideal en la que están empeñados unos y otros. En el lenguaje nacionalista, la nación es como un individuo trascendente cuyo origen se remonta a la noche de los tiempos. La nación se les presenta como una totalidad, al modo de una divina hipóstasis, dotada de una personalidad propia, sin fisuras internas, que perdura como un ser singular a lo largo de la historia. Cuando Arzalluz o Pujol dicen "este pueblo, esta nación", parecería que tienen detrás una comunidad compacta, un bloque homogéneo dispuesto en orden de batalla, en marcha a la conquista de un destino inmortal. No es así, desde luego, pero esa persistente realidad no obsta para que sigan hablando, como Aznar cuando había de España, de sus respectivas naciones como sujetos llamados a grandes aventuras y exaltantes proyectos. Y ahí, en ese lenguaje predemocrático, es donde radica el problema para entenderse, pues como por la boca

del pueblo, que diría un romántico, es Dios mismo quien habla, cuando alguien habla en nombre de la nación, cree hablar en nombre de Dios y entonces no hay más que barullo y guerra.

En lugar del lenguaje de la nación como comunidad imaginada, los líderes nacionalistas tendrían que limitarse a poner encima de la mesa los votos que cada uno de ellos ha obtenido. Quizá entonces podrían entenderse, porque, en tal caso, ni Aznar hablará en nombre de España ni Arzalluz o Pujol invocarán el nombre de Euskadi o Cataluña. Tendrán en cuenta, por el contrario, :sus debilidades respectivas, lo corto de sus resultados. El primero ha recibido cerca del 40% de los votos válidos españoles, el segundo no llega al 26% de los vascos y el tercero se ha quedado rozando el 30% de los catalanes: un resultado ideal para que todos los nacionalistas -españoles, vascos, catalanes, todos de centro o de derechas, todos católico, todos creyentes en algún destino manifiesto- se lo piensen dos veces antes de blandir como un arma el nombre de sus respectivas naciones.

En una democracia, los partidos no hablan en nombre de la nación, hablan en nombre de los ciudadanos que votan. Porque, si para negociar los dirigentes políticos se sienten investidos- del divino manto nacional, si creen que en ellos se encarna ese sujeto eterno, entonces se les calienta la boca y no hay manera de ponerse de acuerdo. En cambio, si hablan como representantes del 25%, el 30% o el 40%, que es cosa más prosaica y parcial, todos tendrán conciencia de los límites, de su poder y estarán mejor dispuestos a renunciar a una parte de su programa máximo a cambio de avanzar por el mínimo. Si la única fuerza que llevan a la negociación es la de los votos, no deberían tropezar con dificultades invencibles para suscribir algún tipo de pacto que a lo mejor no garantiza la construcción de la nación ideal, pero asegura, al menos, el Gobierno del Estado por unos años.

Hecho diferencial y resto de España

Santos Juliá, El País, 28/04/1996

Cambó no lo dudaba: "Lo más profundo y persistente, lo menos discutible (del hecho diferencial), es la existencia de la lengua catalana". En efecto, nadie podría discutir que, a pesar de los intentos de la Monarquía Hispánica por unificar la lengua en todos sus dominios, los catalanes seguían hablando catalán. Más complicado resulta, sin embargo, remontarse a principios del siglo XVIII, a la guerra de Sucesión, para fundamentar en ella la legitimidad de una diferencia catalana frente a lo que Cambó llamaba "resto de España". Las viejas libertades catalanas se abolieron a raíz de una guerra europea y mundial entre la casa francesa de Borbón y la casa austriaca de Habsburgo, a la que pertenecía el efímero "rey de los catalanes". Interpretar una guerra financiada por Luis XIV y con el duque de Berwick al mando de las tropas borbónicas como el triunfo de un "Ejército español" sobre Cataluña es un anacronismo de tal calibre que debería ruborizar a los tres rectores de universidad que avalan con su firma semejante historia. Las antiguas libertades catalanas sucumbieron en las luchas por la hegemonía europea de unas monarquías absolutas que no conocían nación ni patria, sólo Dios e imperio.

¿Se habrá constituido entonces un hecho diferencial durante los siglos XIX y XX? Así lo pretenden quienes oponen una Cataluña industrial, europea y moderna a un resto de España rural, ensimismado y medieval. He ahí, si fuera verdad, una auténtica diferencia. Pero, como siempre, la historia es algo más compleja, pues ni los industriales catalanes se atrevieron a competir con los europeos en un mercado libre, sino que forzaron altísimos aranceles para mantener cautivo el mercado español -es decir, eran bastante españoles en su dimensión y en su anhelo de protección-; ni el resto de España vivía de espaldas a la modernidad y a Europa, como la gran banca, la industria siderometalúrgica, los becados de la Junta para Ampliación de

Estudios y hasta un católico andaluz como Manuel de Falla-ponían cada día de manifiesto. ¿De verdad tiene sentido discutir sobre la diferencia de modernidad y europeísmo entre Madrid, Bilbao y Barcelona en los años veinte y treinta?

En realidad, el hecho social y político más diferencial de Cataluña en la primera mitad del siglo XX fue el arraigo del sindicalismo revolucionario, movimiento muy poderoso, pero a la altura de 1930 escasamente moderno y europeo. La CNT se enfrentó a muerte con una clase patronal que se echó en manos del somatén y -esta vez, sí- del Ejército español para mantener el orden a base de pistoleros. Cuando les faltó ese auxilio, los patronos catalanes perdieron sus fábricas y comercios, y aun sus vidas, en la revolución anarcosindicalista que los liquidó como clase hasta que Franco, a la vez que abría de nuevo sus iglesias, les devolvió sus empresas, garantizándoles que los obreros no volverían a moverse aunque les pagaran salarios de miseria. Presentar la Guerra Civil como triunfo de España y derrota de Cataluña no es ya sonrojante, sino insultante para los españoles que, por ejemplo, dieron sus vidas en la defensa de Madrid, última plaza que arrió la bandera de la República Española. Más vale dejar a la historia en el lugar que le corresponde y no despistar a la "opinión pública europea" con el invento de una opresión española sobre Cataluña que se remontaría a la guerra de Sucesión y cuyo último episodio se llamó Francisco Franco.

Con todo, es evidente que existe una diferencia, como revela el hecho de que cada vez que el sistema político español se abre a la democracia, partidos nacionalistas catalanes reclaman un trato diferente para Cataluña. Convendría que explicaran el contenido específico y actual de tal diferencia y el término con relación al cual Cataluña es diferente, porque la novedad respecto a los tiempos de Cambó no es que los catalanes hablen catalán, sino que el concepto "resto de España" ha dejado de ser política y culturalmente operativo.

Todos contentos

Santos Juliá, El País, 12/05/1996

A mediados del pasado mes, Miquel Roca, expresando una opinión común en su partido, decía: "Pretender cerrar el proceso autonómico es querer poner puertas al campo: el proceso autonómico es por definición abierto y flexible". Para esa fecha, los correligionarios de Roca habían tenido ocasión de leer en el programa electoral del PP el apartado "Un marco estable para la España de las Autonomías", que en sus primeras líneas afirmaba: "No puede aceptarse un proceso abierto por tiempo indefinido y de perfiles indeterminados". Si se comparan las dos frases se verá que no se trata, como ahora dicen, de las necesarias "modulaciones" sobre un acuerdo de fondo, sino de políticas estrictamente contrarias: no puede dejarse abierto, clamaba el PP, no se puede cerrar, replicaba CiU; no a la indeterminación, exigía el PP; sí a la flexibilidad, contestaba CiU.

Cerrado/abierto; determinado/flexible no son variaciones sobre un mismo tema, sino conceptos antinómicos: no se puede cerrar una puerta y a la vez dejarla abierta; culminar un trabajo y dejar tareas pendientes. "Proceso autonómico abierto" y "cerrar el proceso autonómico" expresan una concepción no ya diferente sino contraria del Estado, que los populares pretendían "fijar" de una vez por todas, "culminando" las transferencias y "definiendo" las materias intransferibles e indelegables y que los convergentes desean "flexibilizar", dejar en la indeterminación, porque las cosas cambian y lo que hoy parece una competencia indelegable del Estado, mañana puede aceptarse como una competencia normal de las Comunidades Autónomas, o de algunas de ellas.

Cómo ha sido posible recorrer en tan corto tiempo la larga distancia que separaba ambas concepciones es un misterio cuya solución no hay que buscar en el contenido del acuerdo firmado por PP y CiU sino en el escueto hecho de su firma: lo que importa, hasta hoy, no es tanto lo que se ha firmado como haber

firmado. La firma es la fuente de la relativa euforia popular y de la evidente satisfacción nacionalista, porque la firma es lo que permite a los primeros ser gobierno y a los segundos dar un paso de gigante por el camino sólo desbrozado hace tres años y convertido ahora en amplia avenida para avanzar hacia el objetivo final, que no es otro que seguir avanzando sin fin.

Se comprende que el acuerdo llene de gusto a los dirigentes nacionalistas. Tal como las cosas, se van definiendo, los nacionalistas se configuran en su relación con el Estado como partidos de investidura y de gobernabilidad, que es, no por casualidad, el título de los acuerdos, más elocuente en lo que calla que en lo que dice. Al desechar los pactos de legislatura y gobierno y preferir los de investidura y gobernabilidad, los nacionalistas se reservan la envidiable posición del socio que todo lo recibe sin ofrecer nada a cambio excepto las condiciones que le garantizan recibir lo que pide. Con el acuerdo firmado, gobernar significa transferir competencias sin fijar nunca el "perfil", mientras ayudar a la gobernabilidad consiste en asumirlas en un proceso abierto, sin límites ni fronteras.

Lo curioso es que los dirigentes del PP y la prensa que durante tres años ha llorado a lágrima viva la venta de España en el mercado catalán contemplan el acuerdo con esa extraña calma que de pronto les ha embargado a todos. O estaban al límite de su exasperación y han dicho: uufff, ya somos Gobierno, y que sea lo que Dios quiera; o en verdad han experimentado una profunda conversión y están dispuestos a avanzar los primeros no ya por la senda constitucional sino por la asimétrico-federal. A lo mejor es esto lo que quiere decir Aznar cuando, dejándose llevar del ansia fundacional tan característica de nuestros políticos, afirma que su llegada al gobierno constituye un día histórico porque histórico es el encuentro de la derecha española con los nacionalismos moderados. De momento, todos contentos, y a ver qué pasa.

Por no ser menos

Santos Juliá, El País, 27/10/1996

En un Estado tan complejo como el español, con tantos parlamentos y gobiernos autónomos favoreciendo la presencia de tantos sistemas de partidos y tantas élites políticas de ámbito regional, ha sido casi una proeza conseguir que los dos partidos mayoritarios hayan recibido hasta la fecha el 70% de los votos y hayan ocupado en el Congreso de los Diputados casi el 80% de los escaños. Las cuestiones que la Constitución había dejado abiertas podían irse cerrando en un clima razonable, en el que la defensa de los intereses particulares no entraba en directa contradicción con una clara dirección política de los comunes. Con fricciones, pero con una buena dosis de consenso, la articulación de un Estado plurinacional y plurilingüístico, que en otras latitudes se ha revelado imposible, parecía haber entrado aquí en un camino seguramente sembrado de minas, pero con suficientes detectores para neutralizarlas.

Ese panorama de la construcción de un Estado plurinacional comienza, sin embargo, a sufrir los embates de quienes, por no quedarse atrás en el logro de sus fines últimos, han decidido huir hacia adelante para alcanzar en solitario los inmediatos. Las tensiones proceden, como es lógico, tanto de los agravios comparativos entre diferentes comunidades autónomas como de la rivalidad entre partidos dentro de cada comunidad. Así, con objeto de no ser ni parecer menos que los vascos, Jordi Pujol, no bien se había secado la tinta de la firma del pacto del 30% del IRPF, amenazó con exigir para el 2001 la totalidad. Como no podía ser menos, Juan Carlos Rodríguez Ibarra hizo aprobar en su Parlamento la convocatoria de un referéndum que ni su partido ni el resto de los partidos de su comunidad se atrevieron a desautorizar, no fuera a ser que aparecieran como traidores a la causa. Por si fuera poco, el PNV esgrime de nuevo su particular hecho diferencial y sitúa el listón unos centímetros más arriba: no

se sabe muy bien qué misteriosa relación existe entre la identidad vasca y el impuesto de sociedades, pero, por si acaso, Pujol se apresura a afirmar que lo que es bueno para Euskadi también ayuda a profundizar la identidad catalana. Y así será si así lo siente.

Lo cierto es que todo esto sería de otro modo si la complejidad de nuestro sistema se acompañara de acuerdos de fondo entre los diferentes actores políticos de manera que se pusieran barreras a esta especie de consigna de sálvese quien pueda. Pero, de un tiempo a esta parte, los acuerdos de fondo se han sustituido por pactos coyunturales, negociados a toda prisa y con el agravante de nocturnidad, que revelan sobre todo la debilidad de las partes contratantes. En el Gobierno central, el Partido Popular, lejos de la mayoría y sintiendo la pérdida acelerada de intención de voto, no tiene ni idea de hasta dónde está dispuesto a ceder con tal de conservar sus apoyos parlamentarios; en los autonómicos, los partidos nacionalistas, estancados en las últimas elecciones, no saben hasta dónde van a exigir con tal de recuperar el terreno perdido o conquistar nuevas posiciones.

Pues esta fiebre pactista que nos invade no es el resultado de negociaciones entre partidos políticos con apoyos mayoritarios y objetivos precisos, sino más bien la consecuencia de una estrategia un tanto aventurera en la que cada socio intenta obtener el mejor resultado posible con el propósito de reforzar su débil posición. No es que entre todos no alcancen el 50% de los votantes, sino que ninguno de ellos dispone de mayoría en sus respectivos parlamentos. Son, por tanto, acuerdos entre socios que, sólo tienen en común gobernar en minoría, y es esa debilidad en el centro, multiplicada por la suma de debilidades en la periferia, lo que introduce al conjunto del sistema en un proceso difícilmente reversible de desagregación y fragmentación. Nadie sabe dónde se sitúa la meta de la carrera, pero todos sienten la irrefrenable compulsión, de seguir adelante.

Que cien naciones florezcan

Santos Juliá, El País, 03/11/1996

La primera fecha crucial en la historia del nacionalismo catalán - escribe Joan Lluís Marfany en su magnífico libro *La cultura del catalanisme*- es la del 21 de octubre de 1886. ¿Qué habrá ocurrido ese día, se preguntará el asombrado lector que no tiene registrada esa fecha como memorable en los anales de ninguna nación? Pues nada menos que la fundación del Centre Escolar Catalanista como una sociedad filial del Centre Català. A partir de este acontecimiento germinal, el catalanismo comenzó su transformación en nacionalismo, proceso que Marfany da por consumado entre 1898 y 1901.

Esta reconfortante noticia despeja de brumas medievales el nacimiento de la nación catalana y lo trae a una realidad más inmediata y más prosaica también, pues lejos de consistir en un hecho de armas es sobre todo un hecho de cultura. No fueron nobles guerreros ni héroes populares sino músicos, poetas, literatos, socios de centros excursionistas, de orfeones, de sociedades recreativas los que se encargaron de extender la ideología nacional. Sin duda, esta nueva clase social que inventa la nación navegará, mecida en la poesía y el canto, río arriba en busca del héroe y del guerrero que legitimen su extraordinaria creación. Pero, despojado de lirismo y de mística, el nacionalismo aparece como producto de una clase media con la voluntad de ser nación y los medios institucionales para propagar la buena nueva de su nacimiento.

Aragoneses y canarios han tardado un siglo en seguir los pasos de catalanes y vascos, pero al fin se han decidido a emprender el camino hacia la cumbre: pronto serán nación. Seguirán otros, - valencianos, andaluces, tal vez castellanos, por qué no astures y leoneses- pues en los veinte últimos años hemos asistido al singular experimento de la consolidación de élites políticas regionales, extraídas de la clase media y dotadas de bases

institucionales y culturales para el ejercicio autónomo del poder. Son élites impregnadas de un fuerte espíritu regionalista, que se han dedicado a recuperar las señas de una presunta identidad perdida, a revivir lenguas olvidadas, a fomentar fiestas locales caídas en desuso, celebrar a artistas regionales, editar montones de libros de temática municipal, promover espectáculos populares, inventar tradiciones, organizar peregrinaciones a la ermita de la patrona del lugar.

Han creado así región y en región se habrían quedado si no hubieran sentido, como los catalanistas del último tercio del siglo pasado, una superior incitación a transformar su regionalismo en nacionalismo. Lo único que las distingue de aquellos pioneros es que estas nuevas élites no afirman su voluntad de ser nación frente a un poder central uniformador y centralizador -frente a España, por así decir- sino movidas por el ejemplo del vecino que ha conseguido transformar un hecho de cultura en una ideología política y ha aprendido a sacar de esa transmutación jugosos dividendos. Nacionalistas catalanes y vascos han insistido tan sin desmayo en sus respectivos hechos diferenciales como argumento para recitar en todos sus tiempos los verbos pedir y exigir que los demás han puesto también manos a la obra en la excitante tarea de hacer historia alumbrando una nueva nación.

La creación de instituciones de autogobierno, en un sistema de competencia desleal y sin reglas de juego aceptadas por todos, debía conducir necesariamente a la floración de diez, de cien naciones. Transformar un regionalismo en nacionalismo es sólo una cuestión de voluntad, de medios y de oportunidad histórica. Si hace un siglo el catalanismo logró convertirse en nacionalismo ¿por que no habría de conseguirlo ahora el aragonesismo, el valencianismo, el andalucismo? ¿Acaso porque dejaron escapar la ocasión a finales del siglo pasado? Bueno, la verdad es que siendo la nación eterna, un siglo es como un suspiro. Y además, se tarda tan poco tiempo y se obtiene tanto provecho en re/crear una nación...